



**Comunidad
de Madrid**

Exp.: 09-OPEN-00101.6/2024

ASUNTO: DENEGACIÓN ACCESO INFORMACIÓN

ANTECEDENTES

Primero. - Mediante escrito de petición de acceso a la información pública, de fecha 21 de mayo de 2024, [REDACTED], solicitó la siguiente información:

“Se me remita el Informe definitivo elaborado y emitido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid en relación con el colegio concertado Scientia San Sebastián de Getafe.”

Segundo. - La tramitación de dicha solicitud corresponde a la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, en virtud del Decreto 248/2023, de 11 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que ha sido modificado por el Decreto 28/2024, de 24 de abril, del Consejo de Gobierno.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. - De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Segundo. - De conformidad con el artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso puede ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

En el apartado 2 de dicho artículo, se establece que la aplicación de los límites será justificada, proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.



**Comunidad
de Madrid**

En relación con este artículo se ha pronunciado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno indicando en la resolución número 467/2022, de 19 de julio, que la previsión del artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, tiene como causa la debida protección que debe aplicarse a los expedientes, de carácter penal, administrativo o disciplinario, principalmente mientras están siendo tramitados, de tal manera que, la correcta sanción de las infracciones o ilícitos cuya comisión quede acreditada, no se vea impedida por la divulgación de información. Se trata así de asegurar el buen fin de todos los actos de investigación practicados en la fase de instrucción de un procedimiento penal, administrativo o disciplinario.

Por otro lado, dicho Consejo se ha pronunciado sobre la aplicación de los límites al derecho de acceso señalando:

- a) Los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación, ni absolutamente en relación con los contenidos.
- b) Su aplicación no será en ningún caso, automática, debiéndose analizar, por el contrario, si la estimación de la petición supone un perjuicio concreto, definido y evaluable (test del daño), no pudiendo afectar o ser relevante para un determinado ámbito material.
- c) Su aplicación ha de ser justificada y proporcional, atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso. (test del interés público).

De conformidad con todo lo anterior, procede analizar el caso concreto realizando un estudio sobre la posible aplicación del límite descrito en el artículo 14.1.e) al derecho de acceso (test del daño y test de interés público)

Al respecto es preciso señalar, en primer lugar, que la Comunidad de Madrid ha procedido a comunicar a la Fiscalía presuntas actuaciones irregulares en el centro San Sebastián de Getafe.

Dado que existe una denuncia sobre el asunto, el hecho de que terceras personas accedan a un informe de auditoría relativo a una actuación denunciada puede afectar a las indagaciones y provocar disfunciones, perjudicando el correcto desarrollo de la investigación y de la denuncia presentada.

Además, debe tenerse en cuenta que al haberse iniciado las diligencias de investigación por parte de la Fiscalía de Getafe el divulgar la información a la que se pretende acceder supondría un perjuicio para la investigación y sanción; tanto de un posible ilícito penal, como administrativo o disciplinario.

En Madrid, a fecha de la firma
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA,
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO



**Comunidad
de Madrid**

Este perjuicio podría producirse puesto que el conocimiento de la información solicitada podría incidir negativamente en la eficacia de las actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía.

Por tanto, se considera que el interés público en el esclarecimiento de los hechos, así como en la protección de los posibles procedimientos de exigencia o de depuración de responsabilidades por eventuales irregularidades prevalece sobre el derecho de acceso a la información pública.

Por otro lado, la aplicación de la restricción se encontraría justificada no solo en la preservación de las actuaciones de investigación y de desarrollo de los procedimientos penales, administrativos o disciplinarios, sino también en la protección de los sujetos pasivos de dicho procedimiento; por lo que se considera adecuadamente aplicado el límite, sin que se aprecie un interés superior en acceder a la información pública, al menos en este momento en que se encuentra en curso el procedimiento, al haberse incoado diligencias de investigación.

En consecuencia, atendiendo a las circunstancias concurrentes se aprecia que los límites invocados tienen la entidad suficiente como para considerarse de aplicación en este caso, por lo que

RESUELVO

Denegar el acceso a la información solicitada de conformidad con el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Contra esta resolución cabe interponer:

1. Con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía judicial contencioso administrativa, la reclamación regulada en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, ante el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

2. Recurso ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto.

En Madrid, a fecha de la firma
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA,
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Firmado digitalmente por: DE LA PEÑA MONTES DE OCA JORGE ELÍAS
Fecha: 2024.06.13 15:03